

VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO: prevención e investigación

AUTORES:

Cecilia Suescún
Predoctoral Fellow CESED

Juanita Durán
Socia Fundadora e investigadora Senior,
Laboratorio de Justicia y Política Criminal

Michael Weintraub
Director Área de Seguridad y Violencia CESED

1. Introducción

La violencia basada en género (VBG) es un grave problema de salud pública que afecta a más de una tercera parte de las mujeres en el mundo (35%) (Organización Mundial de la Salud, 2019). Esta violencia adopta diversas formas—física, sexual, económica y/o psicológica—y puede presentarse en diferentes contextos, ya sea dentro del hogar, en espacios públicos, en instituciones educativas o en entornos laborales, entre otros.

La VBG puede resultar en muertes, lesiones, embarazos no deseados, abortos inducidos o espontáneos, complicaciones ginecológicas, enfermedades de transmisión sexual, partos prematuros y bebés con bajo peso al nacer (Organización Mundial de la Salud, 2013). Además de afectar la salud física, la VBG tiene graves consecuencias sobre la salud mental de las mujeres, incluyendo depresión, trastorno de estrés postraumático, trastornos de ansiedad e intentos de suicidio (Organización Mundial de la Salud, 2010). Los niños criados en entornos violentos también sufren las repercusiones de la VBG y pueden perpetuar esta violencia a lo largo sus vidas. Por último, la VBG tiene impactos sociales y económicos para las mujeres, como una menor participación en la fuerza laboral, pérdida de ingresos, limitaciones en sus actividades diarias y una capacidad reducida para cuidar de sí mismas y de sus hijos (Organización Mundial de la Salud, 2013).

América Latina es una región donde la VBG representa un desafío significativo, aunque su prevalencia varía entre países. Según el Observatorio de la Equidad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en la región se registraron al menos 12 femicidios por día en 2021. Asimismo, en algunos países como Bolivia, la cifra de mujeres que han sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja supera el 58.5%, mientras que en otros países como Brasil, Panamá y Uruguay presentan tasas más bajas, en torno al 14-17% (Bott et al., 2019). En la mayoría de los países de la región, esta proporción se encuentra entre un cuarto y un tercio (Bott et al., 2019).

En Colombia, la VBG es sistemática y cotidiana. Según el Observatorio de Igualdad de Género de la CEPAL, Colombia ocupa el segundo lugar en la región en número de muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, y el quinto lugar en femicidios. Asimismo, la proporción de mujeres víctimas de violencia por parte de sus parejas (33.3%) supera el promedio regional y de otros países como Brasil, México, Argentina y Perú (Bott et al., 2019). Informes de Sisma Mujer (2021) muestran que entre enero y septiembre de 2021 en Colombia, una mujer fue víctima de violencia intrafamiliar cada 5,6 minutos, de violencia por parte de su pareja cada 18,7 minutos, y de femicidio cada 1,92 días.

En este contexto, desde el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Universidad de los Andes y el Laboratorio de Justicia y Política Criminal (LJPC) elaboramos este documento de política para examinar la evidencia disponible sobre cómo combatir la violencia de género. Este documento se divide en dos secciones principales que se centran en: i) la evidencia relacionada con la prevención de la VBG y ii) aquella relacionada la investigación de la VBG. Es fundamental destacar que la literatura existente muestra una clara disparidad entre ambas áreas, ya que la mayoría de la atención se ha centrado en la prevención. Adicionalmente, en la primera sección, se abordan tres aspectos cruciales: (i) las intervenciones que la literatura ha demostrado que no funcionan, (ii) las intervenciones que necesitan más evidencia para ser recomendables y (iii) aquellas se han mostrado prometedoras para prevenir la VBG. Con base en esta revisión, ofrecemos recomendaciones de política que podrían aplicarse en el caso colombiano.

2. Lo que sabemos sobre la prevención de la VBG

2.1. Lo que no funciona para prevenir la VBG

Existe evidencia que indica que las siguientes estrategias no llevan a una reducción directa de la incidencia de VBG. Si bien pueden alcanzar con éxito otros objetivos que actúan como factores de protección contra la VBG – por ejemplo, cambiar actitudes de aceptación de la violencia o mejorar la situación económica de las mujeres – no se aconseja utilizarlas como estrategias para prevenir este tipo de violencia.

2.1.1. Programas de microcrédito, ahorro y medios de subsistencia

Los programas de microcrédito, ahorro y medios de subsistencia dirigidos a mujeres o familias parecen no reducir la VBG. En un estudio realizado por Glass et al. (2017), se evaluó un programa que combinaba microcréditos con la entrega de activos ganaderos en la República Democrática del Congo. Los autores encontraron que, después de 18

meses, no hubo una reducción significativa de la VBG dentro de las parejas participantes (Glass et al., 2017).

Con un enfoque similar, Green et al. (2015) el programa “WINGS” proporcionaba transferencias de efectivo para ayudar a mujeres en extrema pobreza a establecer pequeños negocios. Este programa tampoco mostró impactos significativos en la reducción de la violencia de pareja (Green et al., 2015). Por su parte, Ismayilova et al. (2018) llevaron a cabo un estudio que evaluó un programa de intervención económica para mujeres con diversas modalidades. A pesar de estas intervenciones, los resultados dos años después no demostraron impactos significativos en la violencia de pareja (Ismayilova et al., 2018).

2.1.2. Intervenciones dirigidas exclusivamente a niños y hombres

La literatura también ha demostrado que las intervenciones dirigidas exclusivamente a niños y hombres, especialmente aquellas de corta duración, no son efectivas para prevenir la VBG. Por ejemplo, Hossain et al. (2014) llevaron a cabo un estudio en 12 comunidades de Costa de Marfil para evaluar el impacto de un programa de grupos de discusión con hombres que buscaban aumentar la conciencia sobre los impactos de la VBG, cuestionar creencias inequitativas de género y enseñar habilidades de gestión de conflictos. Los autores no encontraron una reducción significativa de la VBG (Hossain et al., 2014) atribuible al programa.

Muchas de las intervenciones que involucran solamente a niños y hombres son intervenciones de espectadores o *bystanders*, que buscan cambiar actitudes y comportamientos relacionados con la violencia sexual contra las mujeres. Estas intervenciones se centran en la idea de que los hombres pueden ser aliados en la prevención de agresiones sexuales y la preocupación de que otro tipo de intervenciones se centren demasiado en los hombres como perpetradores (Katz and Moore, 2013; Kettrey and Marx, 2019).

En esta línea de ideas, Katz and Moore (2013) llevaron a cabo un metaanálisis que sugiere que las intervenciones de *bystanders* son eficaces para promover comportamientos deseables en los espectadores y aumentar la intención de ayudar a otras personas en situaciones de riesgo. Además, estos programas también han mostrado reducir las actitudes de apoyo a la violación y la propensión a cometer actos de violación, aunque estos efectos son de menor magnitud (Katz and Moore, 2013). Sin embargo, los autores no encuentran que este tipo de programas logren disminuir la incidencia real de agresiones sexuales (Katz and Moore, 2013).

Otra revisión sistemática y metaanálisis realizada por Kettrey and Marx (2019) examinó también los efectos de los programas de espectadores en la intervención de *bystanders* y en la perpetración de agresión sexual. Los resultados indicaron que estos programas tienen un efecto significativo y positivo en la intervención de espectadores, pero tampoco muestran un efecto significativo en la perpetración de agresiones sexuales (Kettrey and Marx, 2019).

Un estudio adicional de Miller et al. (2014) evaluó un programa llamado “Parivartan”, el cual capacitó a entrenadores para convertirse en agentes de cambio y promover la equidad de género entre jóvenes atletas en la India. Aunque se observaron mejoras en las actitudes de igualdad de género, la intervención no logró una reducción significativa en la perpetración de violencia sexual después de 12 meses (Miller et al., 2014). Finalmente, Elias-Lambert and Black (2016) evaluaron un programa de prevención de la violencia sexual dirigido a miembros de fraternidades en Estados Unidos. Sus hallazgos sugieren que este tipo de programas puede tener un impacto positivo en las actitudes y comportamientos relacionados con la violencia sexual entre los miembros de la fraternidad, aunque su efectividad puede ser limitada en el caso de individuos considerados de alto riesgo (Elias-Lambert and Black, 2016).

2.1.3. Intervenciones breves de asesoramiento y planificación de seguridad para mujeres embarazadas

Las intervenciones de asesoramiento breve y planificación de la seguridad dirigidas a mujeres embarazadas, que generalmente consisten en sesiones psicoeducativas de una a dos horas de duración, no han demostrado tener un impacto significativo en la reducción de la VBG.

Por ejemplo, en un estudio realizado por Bair-Merritt et al. (2010), se evaluó el “Healthy Start Program” en Hawái. Esta intervención involucraba visitas domiciliarias a familias con niños pequeños en alto riesgo de sufrir maltrato infantil y violencia de pareja, con un enfoque en la promoción de la salud infantil y la reducción de la violencia (Bair-Merritt et al., 2010). El seguimiento de las mujeres se llevó a cabo durante nueve años, y los resultados no mostraron una reducción significativa en la incidencia de episodios de VBG física o sexual por parte de las parejas (Bair-Merritt et al., 2010).

En otro estudio realizado por McFarlane et al. (2000), se evaluaron tres tipos de intervenciones breves destinadas a mujeres embarazadas víctimas de violencia en clínicas prenatales en Estados Unidos. Después de un seguimiento a los 6, 12 y 18 meses, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos de intervención

frente la violencia de pareja (McFarlane et al., 2000). Además, McFarlane et al. (2006) llevaron a cabo una intervención en clínicas de atención primaria en Estados Unidos que involucraba a 360 mujeres maltratadas que habían experimentado abuso físico o sexual en los 12 meses anteriores. Se probaron dos intervenciones: una tarjeta de orientación y un protocolo de gestión de casos de enfermería de 20 minutos (McFarlane et al., 2006). Sin embargo, los autores no encontraron impactos significativos en la violencia de pareja con ninguna de estas intervenciones (McFarlane et al., 2006).

2.2. Lo que todavía no sabemos si funciona para prevenir la VBG

Existen algunos tipos de intervención para los que aún no tenemos claridad sobre su efectividad para combatir la VBG. Por un lado, hay intervenciones para las cuales todavía no existe evidencia sólida dentro de la literatura que demuestre sus efectos, como son las campañas de marketing social y de entretenimiento educativo. Por otro lado, existe otro tipo de intervenciones, como son las que involucran entrenamiento en defensa personal para mujeres y niñas, para las que la evidencia es contradictoria y, por lo tanto, no sería recomendable priorizar este tipo de estrategias.

2.2.1. Campañas de marketing social y entretenimiento educativo

Las campañas de marketing social y tecnologías digitales y de entretenimiento educativo para combatir la VBG suelen centrarse en promover normas y valores sociales positivos, así como en desalentar aquellos que son perjudiciales a través del debate público y la interacción social (Paluck et al., 2010). Estas campañas, aunque tienen el potencial de llegar a un gran número de personas, hasta ahora no han demostrado de manera concluyente su capacidad para modificar estos comportamientos. Hasta el momento, no existen estudios rigurosos que evalúen los efectos de estos programas sobre la incidencia de la VBG.

Sin embargo, otros estudios apuntan a que este tipo de campañas y, en general, los medios de comunicación masivos, generan cambios en comportamientos que pueden llevar eventualmente a una disminución de la VBG. Por ejemplo, en Italia, Colagrossi et al. (2023) demuestran cómo la cobertura mediática de un femicidio provoca un aumento en las llamadas a las líneas de ayuda. Este efecto es observable en la semana siguiente a la noticia y especialmente en la provincia donde ocurrió el femicidio (Colagrossi et al., 2023). Mientras tanto, en Estados Unidos, el movimiento #MeToo tuvo un impacto significativo en la denuncia de delitos sexuales (Levy and Mattsson, 2023): dentro de sus primeros seis meses, el movimiento produjo un aumento del 10% en la denuncia de delitos sexuales— más no de la incidencia de la VBG—y este efecto persistió durante más de un año después

de su inicio (Levy and Mattsson, 2023). El movimiento también provocó un aumento en las detenciones por agresiones sexuales (Levy and Mattsson, 2023).

En India, Jensen and Oster (2009) encontraron que la introducción de la televisión por cable redujo la aceptación de la violencia doméstica hacia las mujeres y aumentó la autonomía de las mujeres. Sahay (2021) investigó el impacto de un infame incidente de violación en un autobús en movimiento en Delhi en 2012, lo cual provocó protestas generalizadas. Este incidente aumentó en un 27% la denuncia de la VBG, pero este efecto no está relacionado con un aumento en la incidencia de la VBG (Sahay, 2021).

2.2.2. Entrenamiento en defensa personal

Las intervenciones que involucran el entrenamiento en defensa personal para mujeres y niñas tienen como objetivo crear capacidades de defensa para enfrentar las agresiones sexuales y violaciones perpetradas por cualquier agresor, ya sea por una pareja o un desconocido. La literatura no ha llegado a un consenso sobre la efectividad de estas intervenciones para efectivamente prevenir la VBG.

Por ejemplo, Senn et al. (2015) evaluaron la intervención “EEAA” en tres universidades canadienses. Las participantes en la intervención recibieron cuatro sesiones de tres horas cada una (un total de 12 horas) (Senn et al., 2015). A los 12 meses, las mujeres en la intervención reportaron significativamente menos casos de violación, intentos de violación y contacto sexual no consensuado (Senn et al., 2015). Sin embargo, en un seguimiento posterior a los 18 y 24 meses, no se encontró una reducción significativa de casos de violación, pero sí de los intentos de violación experimentados por las mujeres en la intervención (Senn et al., 2017). Otros estudios, como el de Decker et al. (2018) y Hollander (2014), aunque presentan resultados prometedores de intervenciones de defensa personal en la reducción de la violencia sexual contra las mujeres, tienen múltiples problemas metodológicos como la autoselección y la atrición.

Por otro lado, cuatro experimentos aleatorios desde 2001 han examinado el impacto del “Proyecto de Reducción de Riesgo de Agresión Sexual” de la Universidad de Ohio en las experiencias de agresión sexual contra las mujeres, desarrollado y modificado por Gidycz et al. (2001), Gidycz et al. (2006), Orchowski et al. (2008) y Gidycz et al. (2015). Estas intervenciones estaban destinadas a empoderar a las mujeres para enfrentar el riesgo de violación, comenzando inicialmente con videos, discusiones y juegos de rol sobre situaciones riesgosas, luego ampliándose para incluir un curso de autodefensa y, finalmente, implementando un taller abordando las barreras psicológicas para utilizar estrategias de resistencia. Ninguna de las intervenciones mostró impacto en la

victimización sexual, aunque la intervención fue ajustada después de cada evaluación (Gidycz et al., 2001, 2006; Orchowski et al., 2008; Gidycz et al., 2015).

2.3. Lo que sí funciona para prevenir la VBG

2.3.1. Educación y sensibilización

Una rama de la literatura ha demostrado que las intervenciones que involucran educación y sensibilización sobre temas de roles de género, sexualidad y VBG han presentado resultados prometedores en la prevención de la VBG.

En Tanzania, talleres para mujeres de educación sexual y reproductiva tuvieron un impacto significativo (Shah et al., 2022). Centrado en objetivos de vida y educación sexual integral, estos talleres aumentaron la probabilidad de que las mujeres abandonaran relaciones abusivas. Talleres de fútbol para hombres sobre violencia de género y masculinidad cambiaron sus actitudes hacia la violencia y disminuyeron su actividad sexual (Shah et al., 2022).

En Uganda, videos educativos sobre VBG incrementaron las denuncias de VBG ante las autoridades y redujeron la proporción de mujeres víctimas de violencia (Green et al., 2020). Sin embargo, la aprobación de la violencia no disminuyó, lo que destaca la necesidad de seguir trabajando en cambiar normas sociales arraigadas (Green et al., 2020).

Activismo comunitario. Dentro de este tipo de intervenciones, es importante también mencionar aquellas que hacen uso de activismo comunitario para cambiar actitudes, roles y normas sociales dañinas. Por ejemplo, en Uganda, una intervención que combinaba servicios estándar de VIH con movilización comunitaria para abordar la violencia de pareja resultó en una reducción significativa del 20% en los informes de mujeres sobre violencia de pareja física y sexual un año después de su implementación (Wagman et al., 2015).

Ogum Alangea et al. (2020) evaluaron la Estrategia de Respuesta Rural (RRS) en Ghana, diseñada para reducir la violencia contra mujeres y niñas en comunidades rurales. La intervención utilizó equipos de acción comunitaria formados por activistas capacitados, hombres y mujeres, para desafiar las actitudes de la comunidad sobre VBG, aumentar la conciencia sobre las leyes y brindar apoyo a las parejas afectadas (Ogum Alangea et al., 2020). Los resultados mostraron una disminución significativa en la VBG sexual experimentada por las mujeres y una tendencia no significativa en la reducción de la VBG física (Ogum Alangea et al., 2020).

Por su parte, Le Roux et al. (2020) llevaron a cabo la evaluación de una intervención de tres años en el noreste de la República Democrática del Congo. Esta intervención involucró a comunidades de fe y sus líderes con el propósito de abordar la VBG, especialmente la violencia sexual (Le Roux et al., 2020). La evaluación mostró reducciones significativas en la prevalencia de violencia física y sexual. La tasa reportada de perpetración de violencia física por parte de los hombres se redujo en dos tercios en comparación con el inicio del estudio, y la tasa de mujeres que experimentaban violencia física disminuyó a la mitad (Le Roux et al., 2020).

Intervenciones escolares. Las intervenciones escolares son aquellas que utilizan centros educativos como plataformas y que pueden ser administradas en el aula por profesores o facilitadores, o después de clases, generalmente por facilitadores especializados.

Un ejemplo de esto es la evaluación realizada por Wolfe et al. (2009) de la intervención “The Fourth R”. Esta intervención, implementada en escuelas canadienses, se enfocó en la enseñanza de habilidades relacionales y la promoción de una toma de decisiones más segura en las relaciones. Los resultados mostraron una reducción significativa en la perpetración de violencia física en las relaciones de noviazgo, siendo este hallazgo más pronunciado en los hombres (Wolfe et al., 2009).

Otro estudio, realizado por Mathews et al. (2016), evaluó la intervención “PREPARE”, diseñada para retrasar la iniciación sexual, fomentar el uso del preservativo y reducir la violencia en la pareja entre adolescentes jóvenes. Esta intervención logró una disminución en la experiencia de violencia en el noviazgo entre niñas y niños 12 meses después de la línea de base, aunque no tuvo impacto en la perpetración de violencia en el noviazgo (Mathews et al., 2016).

En Sudáfrica, Jewkes et al. (2008) evaluaron una intervención destinada a grupos de pares de un mismo sexo en escuelas. Esta intervención, dirigida por facilitadores capacitados, abordó temas como relaciones de género, amor, relaciones, violencia y salud sexual. Los resultados mostraron una reducción significativa en la perpetración de violencia en la pareja por parte de los hombres jóvenes, así como una disminución en la proporción de hombres jóvenes que perpetraron más de un episodio de violencia física o sexual (Jewkes et al., 2008).

Además, Coker et al. (2017) evaluaron la intervención “Green Dot” en los Estados Unidos. Esta intervención se implementó en 26 colegios a lo largo de varios años durante los cuales se capacitó a estudiantes líderes para reconocer situaciones y comportamientos que pueden contribuir a la VBG y determinar las acciones que podrían

tomar de manera segura para enfrentarlos. Los resultados indicaron reducciones significativas en la perpetración y experiencia de violencia sexual y física en estudiantes de tercer y cuarto año (Coker et al., 2017). En otra evaluación de “Green Dot” en universidades realizada por Coker et al. (2016), se observó una reducción significativa en los informes de sexo no deseado debido a la reducción en el consumo de alcohol o drogas que afectan la capacidad de dar consentimiento, aunque los autores no encontraron una reducción en la coacción sexual o la violencia física en el noviazgo.

Reducción del consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas. La evidencia a nivel global indica que el consumo problemático de alcohol y drogas se relaciona con un mayor riesgo de perpetración y experiencia de violencia en las relaciones de pareja (Heise, 2011). Además, se ha observado que las mujeres que sufren VBG son más propensas a consumir alcohol a niveles perjudiciales (Heise, 2011).

Por ejemplo, (Wechsberg et al., 2011) evaluaron el impacto de “Women’s Health CoOp” (WHC) en Sudáfrica. Esta intervención breve, facilitada por pares, constó de cuatro módulos (dos sesiones) de dos horas cada uno, que abordaron el conocimiento y las habilidades para reducir el consumo de drogas, el riesgo sexual y la violencia (Wechsberg et al., 2011). Los resultados mostraron una significativa reducción en las experiencias de violencia sexual por parte de la pareja (Wechsberg et al., 2011).

También en Sudáfrica, Minnis et al. (2015) evaluaron “Couples’ CoOp”, una intervención grupal dirigida a hombres con consumo nocivo de alcohol y sus parejas femeninas. Esta intervención se centró en estrategias de comunicación, habilidades de negociación y en la influencia de los roles y expectativas de género en las relaciones de pareja (Minnis et al., 2015). Los autores encontraron una disminución significativa de la violencia reportada por las mujeres seis meses después del inicio del estudio (Minnis et al., 2015).

Finalmente, Murray et al. (2020) evaluaron la intervención Tratamiento de la Violencia y el Alcohol (VATU) en Zambia, una intervención destinada a reducir los síntomas de mala salud mental, la VBG y el abuso de sustancias. En esta intervención participaron parejas con historia de VBG en sesiones individuales. A los 12 meses, los participantes en la intervención reportaron un menor consumo de alcohol y una disminución en los casos de VBG experimentada por mujeres y en los casos de VBG perpetrada por hombres (Murray et al., 2020).

2.3.2. Empoderamiento económico y social de las mujeres

Transferencias económicas. Las transferencias monetarias, tanto condicionadas como incondicionales, han mostrado potencial para reducir la violencia de pareja en varios países de ingresos bajos y medianos (Buller et al., 2018).

En el caso de las transferencias monetarias condicionadas, en México el programa Oportunidades, lo cual provee transferencias condicionadas cada mes a mujeres para la educación de los hijos y chequeos médicos, redujo el abuso doméstico en un 40%, pero aumentó las amenazas violentas (Bobonis et al., 2013). Este efecto no esperado puede deberse a que cambios en la situación económica de las mujeres podrían incrementar la motivación de las represalias por parte de sus parejas masculinas — que se manifiestan a través de amenazas— para recuperar o mantener su dominio sobre los recursos familiares o la capacidad de tomar decisiones (Bobonis et al., 2013).

En Sudáfrica, las transferencias monetarias condicionadas a la asistencia escolar de mujeres adolescentes redujeron las experiencias de violencia física después de tres años (Pettifor et al., 2016). En Perú, el programa Juntos –que incluía una transferencia condicionada a la educación y salud de los niños– redujo significativamente las experiencias de violencia física en las mujeres, pero no la violencia sexual (Perova, 2010). De manera similar, en Colombia, el programa Familias en Acción, que incluyó transferencias monetarias condicionadas también a la salud y educación de los niños, resultó en una disminución significativa de la violencia de pareja poco después de que se pagara la transferencia (Camacho and Rodríguez, 2020).

Las transferencias monetarias no condicionadas también han demostrado efectos prometedores. En Kenia, el programa “Give Directly” –que consistía en transferencias monetarias incondicionales a los hogares– llevó a una reducción en la violencia física y sexual (Haushofer and Shapiro, 2016). El análisis posterior muestra que si la transferencia la recibía una mujer, disminuían ambas formas de violencia de pareja, mientras que si la recibía un hombre, solo disminuía la violencia física (Haushofer et al., 2019). En Ecuador, el programa “Bono de Desarrollo Humano” –un programa de transferencias no condicionadas a mujeres– redujo la violencia emocional contra mujeres con educación secundaria o terciaria, pero aumentó la violencia para aquellas con educación primaria o mayor que la de sus parejas (Hidrobo and Fernald, 2013). En Bangladés, no se encontró un impacto directo en la violencia de pareja entre las mujeres que recibieron transferencias monetarias o de alimentos, pero cuando estas transferencias se acompañaron con comunicación intensiva para el cambio de comportamiento nutricional, se observó una disminución en la violencia física (Roy et al., 2019).

Programas de empoderamiento económico y social dirigidos a mujeres. Varios estudios han examinado el impacto de intervenciones destinadas a empoderar tanto económicamente como socialmente a las mujeres. Pronyk et al. (2006) evaluaron un programa en Sudáfrica llamado “IMAGE” –que combinó microcréditos y sesiones grupales educativas sobre temas como roles de género, relaciones VBG para mujeres– que resultó en una reducción del 55% en la violencia física por parte de la pareja después de dos años. Por su parte, Bandiera et al. (2020) evaluaron un programa de empoderamiento de mujeres en Uganda, que consiste en talleres de microfinanzas, capacitación vocacional y habilidades para la vida para adolescentes, y que llevó a una casi eliminación del sexo forzado, sostenido incluso después de que terminara el programa principal.

Austrian et al. (2018) evaluaron la Iniciativa para Adolescentes en Kenia, que combinó educación escolar, transferencias monetarias, prevención de la violencia a nivel comunitario y discusiones grupales para adolescentes. La intervención resultó en una reducción en las experiencias de violencia física, sexual y/o emocional en las niñas, con un mayor impacto en aquellas involucradas en todas las intervenciones (Austrian et al., 2018). También en Kenia, Sarnquist et al. (2021) examinaron el programa “Mashinani” que proporcionó microcréditos y una intervención de apoyo psicosocial de 12 sesiones para sobrevivientes de violencia, lo que llevó a reducciones significativas en las experiencias de violencia física por parte de las mujeres participantes.

Kapiga et al. (2019) evaluaron el programa “Maisha” en Sudáfrica, comparando el impacto de mujeres que recibieron solo talleres de microfinanzas con aquellas que recibieron los talleres de microfinanzas junto con una capacitación de transformación de género de diez sesiones. La intervención combinada mostró una reducción significativa en las experiencias de violencia física en mujeres (Kapiga et al., 2019). Asimismo, Mastonshoeva et al. (2022) evaluaron programa “Zindagii Shoista” en Tayikistán, que combinó talleres de empoderamiento de género, capacitaciones en generación de ingresos y microsubsídios. Las experiencias de violencia por parte de las mujeres y la perpetración de violencia por parte de los hombres disminuyeron significativamente y se mantuvieron incluso 30 meses después de la finalización de la intervención (Mastonshoeva et al., 2022).

Condiciones laborales. La literatura también ha demostrado que las condiciones laborales influyen las dinámicas de VBG. Bhalotra et al. (2019) llevaron a cabo un estudio exhaustivo en treinta y un países en vía de desarrollo desde 2005 hasta 2016. Los resultados demuestran que el desempleo masculino aumenta la VBG, mientras el desempleo femenino tiene el efecto contrario.

En otros países como Brasil, Bhalotra et al. (2021) establecieron un vínculo claro entre el desempleo y el aumento de la VBG. En Estados Unidos, Aizer (2010) descubrió que la reducción de la brecha salarial de género contribuyó a una disminución de la VBG.

2.3.3. Servicios de justicia y seguridad y respuesta penal

Servicios de justicia y seguridad para mujeres. Un número de intervenciones enfocadas en diseñar servicios de justicia y seguridad para mujeres han demostrado resultados prometedores en el abordaje de la VBG en varios países. La creación de centros de justicia para mujeres en Perú –que ofrecen servicios policiales, de salud y legales– produjo una reducción del 10% en muertes y hospitalizaciones debido a la VBG (Sviatshi and Trako, 2022). Asimismo, la creación de estaciones de policía específicas para mujeres en Brasil llevó a una disminución del 17% en los femicidios (Perova and Reynolds, 2017). En India, el establecimiento de estaciones de policía para mujeres provocó un aumento del 29% en los reportes de violencia doméstica, que no se debe a un aumento en la incidencia de la VBG Amaral et al. (2021).

En Estados Unidos, Miller and Segal (2019) muestran que una mayor representación femenina en las fuerzas policiales provocó un aumento en las denuncias de VBG, una reducción en los homicidios y una disminución en los casos de violencia doméstica. En Inglaterra, Andrews and Johnston Miller (2013) también exploraron la influencia de una mayor representación de mujeres en las fuerzas policiales, encontrando que la presencia de una mujer jefa de policía se asociaba positivamente con la tasa de arrestos por violencia doméstica (Andrews and Johnston Miller, 2013). Además, la representación de mujeres policías marcó una mayor diferencia cuando se les brindaron mayores oportunidades para participar en tareas policiales de primera línea (Andrews and Johnston Miller, 2013).

Endurecimiento de la respuesta penal a la VBG. La implementación de reformas de la respuesta penal combatir la VBG y proteger a las víctimas ha tenido resultados mixtos en distintos países. En Brasil, una reforma legal integral que incluyó penas más severas para los agresores, así como medidas de protección y asistencia social para las víctimas, logró una significativa reducción del 9% en los casos de femicidio (Ferraz and Schiavon, 2022).

En Estados Unidos, se han aplicado diferentes enfoques en las leyes para abordar la violencia doméstica. Iyengar (2009) investigó la efectividad de leyes que se centraban únicamente en el arresto de los victimarios, con un enfoque de arresto obligatorio. Esta medida resultó en un aumento de homicidios relacionados con violencia doméstica

(Iyengar, 2009). En contraste, Chin and Cunningham (2019), también en Estados Unidos, analizaron el impacto de leyes que enfocaban el arresto de los agresores, pero con un enfoque discrecional. En este caso, se observó una reducción en los homicidios por violencia doméstica (Chin and Cunningham, 2019).

3. Lo que sabemos sobre la investigación la VBG

En cuanto a la investigación de VBG, es importante notar que gran parte de la literatura se enfoca en aspectos descriptivos, y las intervenciones son escasas en comparación con la sección anterior dedicada a la prevención. Esta disparidad puede explicarse, al menos en parte, por la complejidad de llevar a cabo intervenciones en el ámbito de la investigación criminal. Los altos costos logísticos y la reticencia de las instituciones a exponerse demasiado son obstáculos significativos que limitan la implementación de intervenciones en este campo. Como resultado, esta sección sobre investigación de la VBG tiende a ser más descriptiva en su enfoque.

La calidad de la investigación en casos de VBG representa un obstáculo significativo para el acceso de las mujeres a la justicia en la región. Este problema se debe a la falta de rigurosidad en la recolección de pruebas, la identificación de las partes involucradas y los retrasos en los procedimientos (Garnelo et al., 2019). Además, se han identificado varios desafíos en la respuesta del personal de justicia penal a casos de VBG. Estos incluyen la promoción de la resolución privada de la VBG, la tendencia a desestimar la gravedad de la violencia, especialmente la violencia psicológica, y la culpabilización de la víctima al presentar una denuncia (Garnelo et al., 2019). También se ha observado que las denuncias presentadas por terceros en lugar de la víctima directa pueden ser menos propensas a recibir una respuesta adecuada por parte de la policía y los fiscales, ya que se considera que tienen menos posibilidades de éxito (Malacalza, 2016).

La gravedad de la violencia en casos de violencia doméstica es el predictor más sólido y consistente del esfuerzo investigativo policial. La investigación cuantitativa en Estados Unidos y Canadá ha demostrado que indicadores de violencia física, como las lesiones en la víctima y el temor de ésta, influyen significativamente en las decisiones policiales para llevar a cabo una investigación más detallada (Bachman and Coker, 1995; Barrett et al., 2011).

En relación con el historial de violencia física de los sospechosos, ha habido resultados contradictorios. Mientras Bachman and Coker (1995) encontraron que este historial no tuvo un impacto significativo en las decisiones de investigación policial, Barrett et al. (2011), utilizando una medida más precisa de la frecuencia de incidentes previos de

violencia doméstica, hallaron que dicho historial sí influyó en las decisiones policiales de investigar.

Asimismo, ciertas características demográficas que indican desventaja y vulnerabilidad de la víctima predicen un mayor esfuerzo investigativo. La policía en Estados Unidos y Canadá tiende a investigar más incidentes de violencia doméstica que involucran a víctimas que hacen parte de una minoría étnica o que son migrantes, así como a víctimas con limitaciones físicas o mentales (Bachman and Coker, 1995; Barrett et al., 2011).

En relación con la influencia del entrenamiento y las políticas policiales, se han encontrado resultados mixtos. Por ejemplo, la Policía de Victoria, en Australia implementó una respuesta policial obligatoria frente a las denuncias de violencia doméstica e introdujo nuevas pautas para gestionar estos casos, centrándose en la protección de las víctimas, la recolección de evidencia y las remisiones a servicios adecuados, entre otras. La implementación de estas nuevas medidas investigativas llevó a un aumento significativo en el tiempo que los policías dedicaron a la escena de los incidentes (Victorian Auditor-General, 2009). Por otro lado, un programa de entrenamiento policial en Canadá se centró en ayudar a los policías a: identificar formas de violencia de pareja; responder a víctimas con diversas necesidades; reconocer el papel, la responsabilidad y las estrategias de intervención de los agentes de policía; y reflexionar sobre el impacto de su trabajo en ellos mismos. La evaluación de este programa demostró que después del entrenamiento, la policía permaneció más tiempo en la escena de los incidentes y fue más propensa a recopilar evidencia (Ruff, 2012). Sin embargo, en un estudio estadounidense más riguroso, no se encontraron diferencias significativas en el tiempo dedicado a la escena después de un entrenamiento enfocado en reconocer las complejidades de la violencia de pareja, la recolección de evidencia en estos casos y nuevas técnicas de entrevista para asegurar la seguridad de las víctimas (Smithey et al., 2004).

La investigación sobre las barreras para la investigación policial de la violencia doméstica se ha basado principalmente en grupos focales y entrevistas con oficiales de policía, víctimas y proveedores de servicios (Dowling et al., 2018). Estos estudios han destacado consistentemente que la falta de evidencia tangible de violencia física, así como la falta de cooperación de la víctima y la falta de disponibilidad de testigos, pueden desalentar a la policía de realizar investigaciones más exhaustivas (HMICFRS, 2017; NSW Ombudsman, 2006; Dowling et al., 2018). Además, la ausencia de interrogatorios separados a la víctima y el posible perpetrador en la escena de la violencia doméstica también puede afectar la disposición de las víctimas a hablar en contra de los sospechosos y, a su vez, influir en la reticencia de la policía para investigar más (HMICFRS,

2017). Es también importante tener en cuenta las limitaciones prácticas del esfuerzo investigativo policial, como el aumento de los costos debido al mayor tiempo dedicado a los incidentes de violencia doméstica (Victorian Auditor-General, 2009).

3.1. Algunas recomendaciones desde la economía del comportamiento

La respuesta inadecuada por parte del personal de justicia penal puede ser atribuida a diversos factores. Uno de ellos es el agotamiento, que resulta del estrés laboral y las interacciones emocionalmente intensas con las víctimas de VBG (Schaufeli et al., 2017). Se ha demostrado que el agotamiento puede llevar a sesgos de comportamiento que influyen en la forma en que los equipos de respuesta de VBG abordan los casos (Michailidis and Banks, 2016; Linos et al., 2022).

Además, la falta de conocimientos y formación sobre cómo responder e investigar casos de VBG puede ser un factor contribuyente. Por ejemplo, recopilar pruebas sobre violencia psicológica puede ser especialmente complicado debido a la falta de evidencia física (Garnelo et al., 2019).

En términos de intervenciones basadas en la economía del comportamiento, la literatura sugiere proporcionar retroalimentación al personal de justicia penal sobre el impacto social de su trabajo. Estudios han demostrado que recordar a los profesionales el impacto positivo de su labor puede aumentar su rendimiento (Grant, 2008; Turner et al., 2008).

Otra recomendación es desarrollar protocolos y plazos claros para una investigación eficaz. Estos protocolos podrían incluir listas de comprobación y plazos que insten a los fiscales y agentes de policía a agotar todas las fuentes de pruebas en una etapa temprana de la investigación (Garnelo et al., 2019).

Finalmente, Garnelo et al. (2019) destacan la importancia de transmitir justicia procesal para aumentar el cumplimiento de las normas y reducir la necesidad de recursos policiales y judiciales. Cuando las personas perciben que el proceso es justo, son más propensas a cumplir las normas (Nagin and Telep, 2017; Brockner, 2002; Paternoster et al., 1997). Por lo tanto, proporcionar información clara sobre cómo cumplir las órdenes de protección puede ser fundamental para aumentar el cumplimiento y reducir la carga de trabajo de las autoridades.

4. Conclusión y recomendaciones

En conclusión, la VBG es un grave problema de salud pública y de seguridad que afecta a un gran número de mujeres a nivel global. Esta violencia tiene consecuencias devastadoras tanto para la salud física y mental de las mujeres, así como efectos económicos y sociales para los hogares.

En respuesta a esta problemática, se han implementado diversas estrategias para prevenir y abordar la VBG. Las intervenciones que involucran educación, sensibilización y/o activismo comunitario han demostrado resultados prometedores en la reducción de este tipo de violencia. Asimismo, las intervenciones que buscan reducir el consumo de alcohol han sido demostradas prometedoras para la reducción de la VBG.

El empoderamiento económico y social de las mujeres a través de transferencias monetarias, programas de empoderamiento y mejores condiciones laborales también ha mostrado efectos positivos en la disminución de la VBG. De igual forma, los cambios en el acceso a la justicia y reformas legales han sido claves para reducir la incidencia de este delito.

Aunque menos estudiado dentro de la literatura, en el ámbito de la investigación, se ha observado que factores como la gravedad de la violencia, las características demográficas de las víctimas y el entrenamiento policial influyen en el esfuerzo investigativo para abordar la violencia doméstica. Sin embargo, persisten barreras como la falta de evidencia tangible, la manera de entrevistar a la víctima y la disponibilidad de testigos que pueden obstaculizar las investigaciones.

En general, es evidente que la lucha contra la VBG requiere un enfoque integral y coordinado que involucre a múltiples actores, desde gobiernos y organizaciones no gubernamentales hasta comunidades y medios de comunicación. La combinación de estrategias basadas en la evidencia puede marcar la diferencia en reducir sustancialmente la VBG.

Referencias

- Aizer, A. (2010). The Gender Wage Gap and Domestic Violence. *American Economic Review*, 100(4):1847-1859.
- Amaral, S., Bhalotra, S. R., and Prakash, N. (2021). Gender, Crime and Punishment: Evidence from Women Police Stations in India.
- Andrews, R. and Johnston Miller, K. (2013). Representative Bureaucracy, Gender, and Policing: The Case of Domestic Violence Arrests in England. *Public Administration*, 91(4):998-1014.
- Austrian, K., Soler-Hampejsek, E., Hewett, P. C., Hachonda, N. J., and Behrman, J. R. (2018). Adolescent Girls Empowerment Programme: Endline Technical Report. Technical report, Population Council, Kenya.
- Bachman, R. and Coker, A. L. (1995). Police Involvement in Domestic Violence: The Interactive Effects of Victim Injury, Offender's History of Violence, and Race. *Violence and victims*, 10(2):91- 106.
- Bair-Merritt, M. H., Jennings, J. M., Chen, R., Burrell, L., McFarlane, E., Fuddy, L., and Duggan, A. K. (2010). Reducing maternal intimate partner violence after the birth of a child: a randomized controlled trial of the Hawaii Healthy Start Home Visitation Program. *Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine*, 164(1):16-23.
- Bandiera, O., Buehren, N., Burgess, R., Goldstein, M., Gulesci, S., Rasul, I., and Sulaiman, M. (2020). Women's Empowerment in Action: Evidence from a Randomized Control Trial in Africa. *American Economic Journal: Applied Economics*, 12(1):210-259.
- Barrett, B. J., St. Pierre, M., and Vaillancourt, N. (2011). Police Response to Intimate Partner Violence in Canada: Do Victim Characteristics Matter? *Women & Criminal Justice*, 21(1):38-62.
- Bhalotra, S., Kambhampati, U., Rawlings, S., and Siddique, Z. (2019). Intimate Partner Violence: The Influence of Job Opportunities for Men and Women. *The World Bank Economic Review*, 35(2):461-479.
- Bhalotra, S. R., Britto, D., Pinotti, P., and Sampaio, B. (2021). Job Displacement, Unemployment Benefits and Domestic Violence.

- Bobonis, G. J., González-Brenes, M., and Castro, R. (2013). Public Transfers and Domestic Violence: The Roles of Private Information and Spousal Control. *American Economic Journal: Economic Policy*, 5(1):179–205.
- Bott, S., Guedes, A., Ruiz-Celis, A. P., and Mendoza, J. A. (2019). Intimate Partner Violence in the Americas: A Systematic Review and Reanalysis of National Prevalence Estimates. *Revista Panamericana de Salud Pública*, 43(26).
- Brockner, J. (2002). Making sense of procedural fairness: How high procedural fairness can reduce or heighten the influence of outcome favorability. *Academy of Management Review*, 27(1):58–76.
- Buller, A. M., Peterman, A., Ranganathan, M., Bleile, A., Hidrobo, M., and Heise, L. (2018). A Mixed-Method Review of Cash Transfers and Intimate Partner Violence in Low- and MiddleIncome Countries. *The World Bank Research Observer*, 33(2):218–258.
- Camacho, A. and Rodriguez, C. (2020). Happily Ever after? Domestic Violence in Periods of Scarcity. Documentos CEDE 018211, Universidad de los Andes, Facultad de Economía, CEDE.
- Chin, Y.-M. and Cunningham, S. (2019). Revisiting the effect of warrantless domestic violence arrest laws on intimate partner homicides. *Journal of Public Economics*, 179:104072.
- Coker, A. L., Bush, H. M., Cook-Craig, P. G., DeGue, S. A., Clear, E. R., Brancato, C. J., Fisher, B. S., and Recktenwald, E. A. (2017). RCT testing bystander effectiveness to reduce violence. *American Journal of Preventive Medicine*, 52(5):566–578.
- Coker, A. L., Bush, H. M., Fisher, B. S., Swan, S. C., Williams, C. M., Clear, E. R., and DeGue, S. (2016). Multi-college bystander intervention evaluation for violence prevention. *American Journal of Preventive Medicine*, 50(3):295–302.
- Colagrossi, M., Deiana, C., Dragone, D., Geraci, A., Giua, L., and Iori, E. (2023). Intimate Partner Violence and Help-Seeking: The Role of Femicide News. *Journal of Health Economics*, 87:102722.
- Decker, M. R., Wood, S. N., Ndinda, E., Yenokyan, G., Sinclair, J., Maksud, N., Ross, B., Omondi, B., and Ndirangu, M. (2018). Sexual violence among adolescent girls and young women in Malawi: a cluster-randomized controlled implementation trial of empowerment self-defense training. *BMC Public Health*, 18(1):1–12.
- Dowling, C., Morgan, A., Boyd, C., and Voce, I. (2018). Policing domestic violence: A review of the evidence. Technical report, Australian Institute of Criminology.

- Elias-Lambert, N. and Black, B. M. (2016). Bystander sexual violence prevention program: Outcomes for high-and low-risk university men. *Journal of Interpersonal Violence*, 31(19):3211–3235.
- Ferraz, C. and Schiavon, L. (2022). Crime, Punishment and Prevention: The Effect of a Legal Reform on Violence Against Women.
- Garnelo, M., Bustin, C., Duryea, S., and Morrison, A. (2019). *Applying behavioral insights to intimate partner violence: improving services for survivors in Latin America and the Caribbean*, volume 699. Inter-American Development Bank.
- Gidycz, C. A., Lynn, S. J., Rich, C. L., Marioni, N. L., Loh, C., Blackwell, L. M., Stafford, J., Fite, R., and Pashdag, J. (2001). The evaluation of a sexual assault risk reduction program: a multisite investigation. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 69(6):1073.
- Gidycz, C. A., Orchowski, L. M., Probst, D. R., Edwards, K. M., Murphy, M., and Tansill, E. (2015). Concurrent administration of sexual assault prevention and risk reduction programming: Outcomes for women. *Violence Against Women*, 21(6):780–800.
- Gidycz, C. A., Rich, C. L., Orchowski, L., King, C., and Miller, A. K. (2006). The evaluation of a sexual assault self-defense and risk-reduction program for college women: A prospective study. *Psychology of Women Quarterly*, 30(2):173–186.
- Glass, N., Perrin, N. A., Kohli, A., Campbell, J., and Remy, M. M. (2017). Randomised controlled trial of a livestock productive asset transfer programme to improve economic and health outcomes and reduce intimate partner violence in a postconflict setting. *BMJ Global Health*, 2(1): e000165.
- Grant, A. M. (2008). The significance of task significance: Job performance effects, relational mechanisms, and boundary conditions. *Journal of Applied Psychology*, 93(1):108.
- Green, D. P., Wilke, A. M., and Cooper, J. (2020). Countering Violence Against Women by Encouraging Disclosure: A Mass Media Experiment in Rural Uganda. *Comparative Political Studies*, 53(14):2283–2320.
- Green, E. P., Blattman, C., Jamison, J., and Annan, J. (2015). Women's entrepreneurship and intimate partner violence: a cluster randomized trial of microenterprise assistance and partner participation in post-conflict Uganda). *Social Science & Medicine*, 133:177–188.
- Haushofer, J., Ringdal, C., Shapiro, J., and Wang, X. Y. (2019). Income Changes and Intimate Partner Violence: Evidence from Unconditional Cash Transfers in Kenya. Technical Report w25627, National Bureau of Economic Research, Cambridge, MA.

- Haushofer, J. and Shapiro, J. (2016). The Short-Term Impact of Unconditional Cash Transfers to the Poor: Experimental Evidence from Kenya. *The Quarterly Journal of Economics*, 131(4):1973– 2042.
- Heise, L. (2011). What works to prevent partner violence? an evidence overview.
- Hidrobo, M. and Fernald, L. (2013). Cash transfers and domestic violence. *Journal of Health Economics*, 32(1):304–319.
- HMICFRS (2017). A Progress Report on the Police Response to Domestic Abuse. Technical report, Her Majesty's Inspectorate of Constabulary and Fire & Rescue Services.
- Hollander, J. A. (2014). Does self-defense training prevent sexual violence against women? *Violence Against Women*, 20(3):252–269.
- Hossain, M., Zimmerman, C., Kiss, L., Abramsky, T., Kone, D., Bakayoko-Topolska, M., Annan, J., Lehmann, H., and Watts, C. (2014). Working with men to prevent intimate partner violence in a conflict-affected setting: a pilot cluster randomized controlled trial in rural Côte d'Ivoire. *BMC Public Health*, 14:1–13.
- Ismayilova, L., Karimli, L., Gaveras, E., T^o-Camier, A., Sanson, J., Chaffin, J., and Nanema, R. (2018). An integrated approach to increasing women's empowerment status and reducing domestic violence: Results of a cluster-randomized controlled trial in a West African country. *Psychology of Violence*, 8(4):448.
- Iyengar, R. (2009). Does the certainty of arrest reduce domestic violence? Evidence from mandatory and recommended arrest laws. *Journal of Public Economics*, 93(1-2):85–98.
- Jensen, R. and Oster, E. (2009). The Power of TV: Cable Television and Women's Status in India. *The Quarterly Journal of Economics*, 124(3):1057–1094.
- Jewkes, R., Nduna, M., Levin, J., Jama, N., Dunkle, K., Puren, A., and Duvvury, N. (2008). Impact of Stepping Stones on incidence of HIV and HSV-2 and sexual behaviour in rural South Africa: Cluster Randomised Controlled Trial. *BMJ*, 337.
- Kapiga, S., Harvey, S., Mshana, G., Hansen, C. H., Mtolela, G. J., Madaha, F., Hashim, R., Kapinga, I., Mosha, N., Abramsky, T., et al. (2019). A Social Empowerment Intervention to Prevent Intimate Partner Violence Against Women in a Microfinance Scheme in Tanzania: Findings from the MAISHA Cluster Randomised Controlled Trial. *The Lancet Global Health*, 7(10):e1423–e1434.
- Katz, J. and Moore, J. (2013). Bystander education training for campus sexual assault prevention: An initial meta-analysis. *Violence and Victims*, 28(6):1054–1067.

- Kettrey, H. H. and Marx, R. A. (2019). Does the gendered approach of bystander programs matter in the prevention of sexual assault among adolescents and college students? A systematic review and meta-analysis. *Archives of Sexual Behavior*, 48:2037–2053.
- Le Roux, E., Corboz, J., Scott, N., Sandilands, M., Lele, U. B., Bezzolato, E., and Jewkes, R. (2020). Engaging with Faith Groups to Prevent VAWG in Conflict-Affected Communities: Results from Two Community Surveys in the DRC. *BMC international health and human rights*, 20:1–20.
- Levy, R. and Mattsson, M. (2023). The effects of social movements: Evidence from #MeToo. *Available at SSRN 3496903*.
- Linos, E., Ruffini, K., and Wilcoxon, S. (2022). Reducing burnout and resignations among frontline workers: A field experiment. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 32(3):473– 488.
- Malacalza, L. (2016). Informe 2015 Observatorio de Violencia de Género de la Defensora del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires: monitoreo de políticas públicas y violencia de género. La Plata 2016.
- Mastonshoeva, S., Shonasimova, S., Gulyamova, P., Jewkes, R., Shai, N., Chirwa, E., and Myrntinen, H. (2022). Quantitative Evaluation of Zindagii Shoista (Living with Dignity) Intervention to Prevent Violence against Women in Tajikistan. *Global Health Action*, 15(1):2122994.
- Mathews, C., Eggers, S. M., Townsend, L., Aarø, L. E., de Vries, P. J., Mason-Jones, A. J., De Koker, P., McClinton Appollis, T., Mtshizana, Y., Koech, J., et al. (2016). Effects of PREPARE, a multi-component, school-based HIV and intimate partner violence (IPV) prevention programme on adolescent sexual risk behaviour and IPV: cluster randomised controlled trial. *AIDS and Behavior*, 20:1821–1840.
- McFarlane, J., Soeken, K., and Wiist, W. (2000). An evaluation of interventions to decrease intimate partner violence to pregnant women. *Public Health Nursing*, 17(6):443–451.
- McFarlane, J. M., Groff, J. Y., O'Brien, J. A., and Watson, K. (2006). Secondary Prevention of Intimate Partner Violence: A Randomized Controlled Trial. *Nursing Research*, 55(1):52–61.
- Michailidis, E. and Banks, A. P. (2016). The relationship between burnout and risk-taking in workplace decision-making and decision-making style. *Work & Stress*, 30(3):278–292.
- Miller, A. R. and Segal, C. (2019). Do female officers improve law enforcement quality?: Effects on crime reporting and domestic violence. *The Review of Economic Studies*, 86(5 (310)): 2220–2247.

- Miller, E., Das, M., Tancredi, D. J., McCauley, H. L., Virata, M. C. D., Nettiksimmons, J., O'Connor, B., Ghosh, S., and Verma, R. (2014). Evaluation of a gender-based violence prevention program for student athletes in Mumbai, India. *Journal of Interpersonal Violence*, 29(4):758–778.
- Minnis, A. M., Doherty, I. A., Kline, T. L., Zule, W. A., Myers, B., Carney, T., and Wechsberg, W. M. (2015). Relationship power, communication, and violence among couples: results of a cluster-randomized HIV prevention study in a South African township. *International Journal of Women's Health*, pages 517–525.
- Murray, L. K., Kane, J. C., Glass, N., Skavenski van Wyk, S., Melendez, F., Paul, R., Kmetz Danielson, C., Murray, S. M., Mayeya, J., Simenda, F., et al. (2020). Effectiveness of the Common Elements Treatment Approach (CETA) in Reducing Intimate Partner Violence and Hazardous Alcohol Use in Zambia (VATU): A randomized controlled trial. *PLoS Medicine*, 17(4): e1003056.
- Nagin, D. S. and Telep, C. W. (2017). Procedural justice and legal compliance. *Annual Review of Law and Social Science*, 13:5–28.
- NSW Ombudsman (2006). Domestic violence: improving police practice: a special report to parliament under s31 of the ombudsman act 1974. Technical report, New South Wales Ombudsman.
- Ogum Alangea, D., Addo-Lartey, A. A., Chirwa, E. D., Sikweyiya, Y., Coker-Appiah, D., Jewkes, R., and Adanu, R. M. (2020). Evaluation of the Rural Response System Intervention to Prevent Violence Against Women: Findings from a Community-Randomised Controlled Trial in the Central Region of Ghana. *Global Health Action*, 13(1):1711336.
- Orchowski, L. M., Gidycz, C. A., and Raffle, H. (2008). Evaluation of a sexual assault risk reduction and self-defense program: A prospective analysis of a revised protocol. *Psychology of Women Quarterly*, 32(2):204–218.
- Organización Mundial de la Salud (2010). *Preventing Intimate Partner and Sexual Violence Against Women: Taking Action and Generating Evidence*.
- Organización Mundial de la Salud (2013). *Global and Regional Estimates of Violence Against Women: Prevalence and Health Effects of Intimate Partner Violence and Non-Partner Sexual Violence*. Organización Mundial de la Salud, Geneva, Switzerland.
- Organización Mundial de la Salud (2019). Respect women: Preventing violence against women. Technical report, World Health Organization, Geneva.

- Paluck, E. L., Ball, L., Poynton, C., and Sieloff, S. (2010). Social norms marketing aimed at gender-based violence: A literature review and critical assessment. *New York: International Rescue Committee.*
- Paternoster, R., Bachman, R., Brame, R., and Sherman, L. W. (1997). Do Fair Procedures Matter? The Effect of Procedural Justice on Spouse Assault. *Law & Soc'y Rev.*, 31:163.
- Perova, E. (2010). *Three Essays on Intended and Not Intended Impacts of Conditional Cash Transfers.* University of California, Berkeley.
- Perova, E. and Reynolds, S. A. (2017). Women's police stations and intimate partner violence: Evidence from Brazil. *Social Science & Medicine (1982)*, 174:188-196.
- Pettifor, A., MacPhail, C., Hughes, J. P., Selin, A., Wang, J., Gómez-Olivé, F. X., Eshleman, S. H., Wagner, R. G., Mabuza, W., Khoza, N., et al. (2016). The Effect of a Conditional Cash Transfer on HIV Incidence in Young Women in Rural South Africa (HPTN 068): A Phase 3, Randomised Controlled Trial. *The Lancet Global Health*, 4(12): e978-e988.
- Pronyk, P. M., Hargreaves, J. R., Kim, J. C., Morison, L. A., Phetla, G., Watts, C., Busza, J., and Porter, J. D. (2006). Effect of a Structural Intervention for the Prevention of Intimate Partner Violence and HIV in Rural South Africa: A Cluster Randomised Trial. *The Lancet*, 368(9551):1973-1983.
- Roy, S., Hidrobo, M., Hoddinott, J., and Ahmed, A. (2019). Transfers, Behavior Change Communication, and Intimate Partner Violence: Postprogram Evidence from Rural Bangladesh. *Review of Economics and Statistics*, 101(5):865-877.
- Ruff, L. (2012). Does Training Matter? Exploring Police Officer Response to Domestic Dispute Calls Before and After Training on Intimate Partner Violence. *The Police Journal*, 85(4):285-300.
- Sahay, A. (2021). *The Silenced Women: Can Public Activism Stimulate Reporting of Violence against Women?* Policy Research Working Paper Series 9566, The World Bank, Washington, D.C., USA.
- Sarnquist, C. C., Ouma, L., Lang'at, N., Lubanga, C., Sinclair, J., Baiocchi, M. T., and Cornfield, D. N. (2021). The Effect of Combining Business Training, Microfinance, and Support Group Participation on Economic Status and Intimate Partner Violence in an Unplanned Settlement of Nairobi, Kenya. *Journal of Interpersonal Violence*, 36(7-8):3903-3921.
- Schaufeli, W. B., Maslach, C., and Marek, T. (2017). Professional burnout: Recent developments in theory and research.

- Senn, C. Y., Eliasziw, M., Barata, P. C., Thurston, W. E., Newby-Clark, I. R., Radtke, H. L., and Hobden, K. L. (2015). Efficacy of a Sexual Assault Resistance Program for University Women. *New England Journal of Medicine*, 372(24):2326–2335.
- Senn, C. Y., Eliasziw, M., Hobden, K. L., Newby-Clark, I. R., Barata, P. C., Radtke, H. L., and Thurston, W. E. (2017). Secondary and 2-year outcomes of a sexual assault resistance program for university women. *Psychology of Women Quarterly*, 41(2):147–162.
- Shah, M., Seager, J., Montalvao, J., and Goldstein, M. (2022). Two Sides of Gender: Sex, Power, and Adolescence.
- Sisma Mujer (2021). ¡La Lucha Feminista No Se Detiene! Comportamiento de las Violencias Contra Las Mujeres en Colombia durante 2020 y 2021. Boletín 28, Sisma Mujer, Bogotá.
- Smithey, M., Green, S. E., and Giacomazzi, A. L. (2004). The Ineffectiveness of Training on Increasing Time at the Scene, Acceptance for Prosecution, and Convictions of Domestic Violence Cases. *The Police Journal*, 77(4):309–326.
- Sviatshi, M. M. and Trako, I. (2022). Gender Violence, Enforcement, and Human Capital: Evidence from Women’s Justice Centers in Perú.
- Turner, Y., Hadas-Halperin, I., and Raveh, D. (2008). Patient photos spur radiologist empathy and eye for detail. In *Annual Meeting of the Radiological Society of North America, November*.
- Victorian Auditor-General (2009). Implementing Victoria Police’s code of practice for the investigation of family violence. Technical report, Victorian Auditor-General’s Office.
- Wagman, J. A., Gray, R. H., Campbell, J. C., Thoma, M., Ndyababo, A., Ssekasanvu, J., Nalugoda, F., Kagaayi, J., Nakigozi, G., Serwadda, D., et al. (2015). Effectiveness of an Integrated Intimate Partner Violence and HIV Prevention Intervention in Rakai, Uganda: Analysis of an Intervention in an Existing Cluster Randomised Cohort. *The Lancet Global Health*, 3(1): 23–33.
- Wechsberg, W. M., Zule, W. A., Luseno, W. K., Kline, T. L., Browne, F. A., Novak, S. P., and Ellerson, R. M. (2011). Effectiveness of an adapted evidence-based woman-focused intervention for sex workers and non-sex workers: the Women’s Health Co-Op in South Africa. *Journal of Drug Issues*, 41(2):233–252.
- Wolfe, D. A., Crooks, C., Jaffe, P., Chiodo, D., Hughes, R., Ellis, W., Stitt, L., and Donner, A. (2009). A school-based program to prevent adolescent dating violence: A cluster randomized trial. *Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine*, 163(8):692–699.